



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
SINALOA

Culiacán, Sinaloa, 31 de julio de 2023
Oficio: CEDH/VG-CT/06/2023

Con la finalidad de poner a disposición del público las Recomendaciones emitidas por esta Comisión Estatal en el periodo 1998-2007, previo proceso de digitalización, me permito solicitar a los integrantes del Comité de Transparencia de esta CEDH, analice la propuesta de esta Visitaduría General, en el sentido de eliminar u omitir las partes o secciones clasificadas como confidenciales de dichas resoluciones, de conformidad con lo previsto por los artículos 141 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior permitiría la publicación de tales documentos en nuestra página web, facilitando así el acceso a su contenido en versión pública.

En esa tesitura, someto a su consideración la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones correspondientes a los años 1998 a 2007, por contener información concerniente a personas físicas identificadas o identificables tal como lo establece el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y de acuerdo a lo previsto por la fracción II del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.

Por lo anterior, de manera general y enunciativa más no limitativa, señalo los datos a testar en los documentos en cuestión, mencionando que cada Recomendación deberá acompañarse de un listado con los datos específicos que sean eliminados u omitidos.

Datos a testar

Nombre de persona(s) quejosa(s)
Nombre de víctima(s)
Nombres de menores de edad
Nombres de testigos
Nombres de civiles
Nombres de personas servidoras públicas
Nombres de autoridades responsables
Nombres de presuntos responsables
Número de averiguaciones previas
Número de carpetas de investigación
Folio de denuncia penal

Edad
Estado civil
Domicilios particulares y/o ubicaciones específicas
Escolaridad
Ocupación
Nacionalidad
Fechas de nacimiento
Media filiación y rasgos particulares
Números telefónicos
Número de seguridad social o análogo
RFC
CURP
Matrículas, series y descripciones vehiculares y de motocicletas
Números de vehículos oficiales y matrículas
Folios de identificaciones oficiales
Nombres de empresas
Nombres de poblados
Número de escrituras públicas
Número de series y matrículas de armas de fuego
Claves catastrales, entre otros.

Quedo de ustedes.

Atentamente


Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza
Visitador General y Presidente
del Comité de Transparencia





COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
SINALOA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia

En la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, siendo las nueve horas con diez minutos del día primero de agosto de dos mil veintitrés, constituidos previa convocatoria los integrantes del Comité de Transparencia de esta Comisión, Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General; Mtro. Miguel Ángel López Núñez, Secretario Técnico y Lic. Daniela Verdugo Mejía, Directora de Administración, con carácter de Presidente y Vocales respectivamente, en la sala de juntas de este organismo público, ubicada en calle Ruperto L. Paliza 566 Sur en la colonia Miguel Alemán, en esta ciudad, con la finalidad de analizar la propuesta contenida en el oficio número CEDH/VG-CT/06/2023 de fecha 31 de julio de 2023 suscrito por el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General de esta CEDH, por medio del cual pone a consideración la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones correspondientes a los años 1998 a 2007 emitidas por esta Comisión Estatal, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 fracción II y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

I. PASE LISTA DE ASISTENCIA

El Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General, en su carácter de Presidente de este Comité de Transparencia, cede el uso de la voz al Mtro. Miguel Ángel López Núñez, Secretario Técnico de esta CEDH, para tomar lista de asistencia, quien hace constar que se encuentran presentes todos los integrantes de este Comité.

II. DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Mtro. Miguel Ángel López Núñez, declara que en virtud de que nos encontramos presentes los integrantes del Comité, existe quórum legal para sesionar, por lo que el presidente de este Comité declara instalada la sesión.

III. ASUNTOS A TRATAR Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En este numeral se somete a consideración de los integrantes de este Comité los puntos a tratar en esta sesión:

Pase de lista.

Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión.

Resolución correspondiente a la propuesta contenida en el oficio número CEDH/VG-CT/06/2023 de fecha 31 de julio de 2023, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General de esta CEDH, por medio de la cual solicita la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales, que se encuentran en las Recomendaciones correspondientes al periodo 1998-2007 emitidas por esta CEDH.

Por UNANIMIDAD se aprueba el orden del día de esta Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

IV. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO CONFIDENCIALES, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE NÚMERO CEDH/CT/12/2023.

Una vez expuesta la propuesta de resolución del Comité, el Mtro. Miguel Ángel López Núñez recoge los votos y da cuenta de que por UNANIMIDAD se resuelve confirmar la clasificación de los datos personales por considerarse confidenciales, que se encuentran en las Recomendaciones en cuestión.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados todos los puntos previstos en el orden del día, el Presidente del Comité clausura la sesión, siendo las 9:50 horas del día 01 de agosto de 2023.


Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza
Visitador General y Presidente
del Comité de Transparencia


Mtro. Miguel Ángel López Núñez
Secretario Técnico y Vocal
del Comité de Transparencia


Lic. Daniela Verdugo Mejía
Directora de Administración y
Vocal del Comité de Transparencia





COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
SINALOA

EXPEDIENTE NÚMERO: CEDH/CT/12/2023

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Culiacán Rosales, Sinaloa, al día uno del mes de agosto de dos mil veintitrés.

Analizado el expediente citado al rubro, formado con motivo de la petición formulada por el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General de esta CEDH, por medio de la cual solicita la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones emitidas por esta Comisión Estatal en el periodo 1998-2007, este Comité de Transparencia integrado de acuerdo a lo previsto por el artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General y Presidente de este Comité de Transparencia; Mtro. Miguel Ángel López Núñez, Secretario Técnico de esta CEDH; y Lic. Daniela Verdugo Mejía, Directora Administrativa y Vocales de este Comité, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, emite la presente resolución:

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. La petición de referencia fue presentada por el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General de esta CEDH, por medio de la cual solicita la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones correspondientes al periodo 1998-2007, emitidas por esta Comisión.
2. Recibido el oficio antes citado, este Comité de Transparencia lo integró al expediente en el que se actúa, a efecto de contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

II. COMPETENCIA

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 66 fracción II y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. El Visitador General sustenta su petición a través de las siguientes consideraciones y fundamentos:

Con la finalidad de poner a disposición de las personas usuarias las Recomendaciones emitidas por esta Comisión Estatal en el periodo 1998-2007, previo proceso de digitalización, me permito solicitar a los integrantes del Comité de Transparencia de esta CEDH, analice la propuesta de esta Visitaduría General, en el sentido de eliminar u omitir las partes o secciones clasificadas como confidenciales de dichas resoluciones, de conformidad con lo previsto por los artículos 141 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior permitiría la publicación de tales documentos en nuestra página web, facilitando así el acceso a su contenido en versión pública.

En esa tesitura, someto a su consideración la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones correspondientes a los años 1998 a 2007, por contener información concerniente a personas físicas identificadas o identificables tal como lo establece el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y de acuerdo a lo previsto por la fracción II del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.

Por lo anterior, de manera general y enunciativa más no limitativa, señalo los datos a testar en los documentos en cuestión, mencionando que cada Recomendación deberá acompañarse de un listado con los datos específicos que le sean eliminados u omitidos.

Datos a testar
Nombre de persona(s) quejosa(s)
Nombre de víctima(s)
Nombres de menores de edad
Nombres de testigos
Nombres de civiles
Nombres de personas servidoras públicas
Nombres de autoridades responsables
Nombres de presuntos responsables
Número de averiguaciones previas
Número de carpetas de investigación
Folio de denuncia penal
Edad
Estado civil

Domicilios particulares y/o ubicaciones específicas
Escolaridad
Ocupación
Nacionalidad
Fechas de nacimiento
Media filiación y rasgos particulares
Números telefónicos
Número de seguridad social o análogo
RFC
CURP
Matrículas, series y descripciones vehiculares y de motocicletas
Números de vehículos oficiales y matrículas
Folios de identificaciones oficiales
Nombres de empresas
Nombres de poblados
Número de escrituras públicas
Número de series y matrículas de armas de fuego
Claves catastrales, entre otros.

(...)”

SEGUNDO. El artículo 165 establece que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o identificable. Asimismo, el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, dispone que se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, ya sea numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo.

En el mismo sentido, el arábigo y fracción citados en última instancia, establece de manera enunciativa más no limitativa, que una persona es identificada o identificable en cuanto a sus características físicas y los siguientes datos generales: nombre, edad, sexo, estado civil, escolaridad, nacionalidad, número telefónico particular, correo electrónico no oficial, huella dactilar, ADN, número de seguridad social o análogo y Registro Federal de Contribuyente.

TERCERO. A partir de lo antes expuesto, y tomando en cuenta la relevancia de publicar dichas Recomendaciones en versiones públicas a efecto de que se encuentren disponibles para consulta del público resulta procedente CONFIRMAR la declaración de clasificación de los documentos en cuestión.

Al momento de elaborar las versiones públicas de las Recomendaciones mencionadas en el oficio número CEDH/VG-CT/06/2023 y de la presente resolución, el Visitador General deberá testar sólo aquellos datos personales que en ellos se consignan, en apego a lo previsto en el artículo 160, 165 de la Ley de Transparencia estatal, en relación con el

artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable en la materia.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 66 fracción II, 141 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

IV. RESOLUCIÓN

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se CONFIRMA por unanimidad la clasificación de los datos considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones enunciadas, según lo precisado en los puntos de Consideraciones y Fundamentos de esta resolución, autorizando la elaboración de las versiones públicas.

NOTIFÍQUESE al Visitador General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa para el efecto conducente.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, en la Décima Sesión Extraordinaria de fecha 01 de agosto de 2023, por unanimidad de votos de sus Vocales, los cuales son enunciados al rubro, haciendo constar que a la fecha de la presente resolución no existe nombramiento de Titular de Datos Personales.


Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza
Visitador General y Presidente
del Comité de Transparencia


Mtro. Miguel Ángel López Núñez
Secretario Técnico y Vocal
del Comité de Transparencia


Lic. Daniela Verdugo Mejía
Directora de Administración y
Vocal del Comité de Transparencia





COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
SINALOA

EXPEDIENTE No. CEDH/IX/SP/033/01
RESOLUCION: RECOMENDACION
No. 038/01

AUTORIDAD DESTINATARIA:
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE MOCORITO.
TRIBUNAL DE BARANDILLA DE MOCORITO.

--- Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil uno en curso.-----

--- **VISTO** para resolver el expediente número CEDH/IX/SP/033/01 integrado con motivo de la investigación iniciada de oficio por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos durante la gira de trabajo realizada por el municipio de Mocorito, Sinaloa, el 27 de octubre del año 2001 en curso y, -----

----- **RESULTANDO** -----

--- **1o.** Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7o., fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, según el cual ésta debe "*supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social de Sinaloa, así como en las diversas corporaciones policiacas y en los centros de reclusión o detención*", diseñó un programa de trabajo de carácter general a fin de precaver, como lo contempla la ley, la violación a derechos humanos de quienes, por diversas circunstancias, se encuentren privados de su libertad física. -----

--- **2o.** Que en cumplimiento de ese programa de trabajo, el 27 de octubre del año 2001 en curso, personal de esta Comisión llevó a cabo una visita de inspección en las instalaciones de esa naturaleza de dicho municipio, corriendo la misma a cargo del licenciado **SP1** Visitador Adjunto de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, acompañado del C. **SP2**, prestador del servicio social profesional de la misma,



COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
SINALOA

actividad que llevó a cabo en ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus responsabilidades. -----

- - - 3o. Que del resultado de dicha visita de inspección, en ejercicio de las facultades fedatarias que al Presidente, Visitador General y Visitadores Adjuntos otorga el artículo 17, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 del mismo ordenamiento, se levantó el acta circunstanciada correspondiente, misma que corre agregada al expediente del caso. -----

- - - 4o. Que siendo las 10:20 horas del día señalado, el visitador de este organismo se constituyó en la oficina del Tribunal de Barandilla, entendiendo la diligencia con quien dijo ser el licenciado **SP3** y desempeñar el cargo de juez de dicho tribunal.-----

--- 5o. Que el visitador de esta Comisión preguntó al licenciado **SP3** si el municipio contaba con Bando de Policía y Buen Gobierno, respondiendo en sentido afirmativo, añadiendo que, incluso, tenía en su poder un ejemplar de dicho ordenamiento, el cual fue publicado en "El Estado de Sinaloa", órgano oficial del gobierno del Estado, de 23 de agosto de 1996.-----

--- 6o. Que la investigación de referencia se llevó a cabo, por un lado, a través del desahogo de un cuestionario escrito, formulado exprofeso, así como mediante una entrevista personal, que en ambos casos se entendió con dicho servidor público. -----

--- Por lo que hace al cuestionario, las preguntas que comprendió fueron las que enseguida se anotan, a las que se respondió en la forma que en cada caso se precisa: -----

"P. 1. ¿Cuántos procedimientos se iniciaron con la recepción del parte informativo de policía del 1o. de agosto al 18 de septiembre del año 2001 en curso?.

"R. 5 procedimientos.

"P. 2. En éstos ¿participaron menores de edad?

"R. Sí () No (X)



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SINALOA

- "P. 2.1. Si la respuesta es afirmativa, sustentarla documentalmente.
- "R. Observación del visitador: dado que la respuesta fue negativa, no se mostró ninguno.
- "P. 2.2. Si es negativa, mostrar el archivo de tales partes policiacos.
- "R. Se presentaron al visitador.
- "P. 3. ¿Cuántas denuncias de particulares fueron presentadas del 1o. de agosto al 18 de septiembre del año 2001 en curso?
- "R. 2 denuncias.
- "P. 4. De éstas ¿cuántas correspondieron a menores de edad?
- "R. Ninguna.
- "P. 5. ¿Qué procedimiento siguió respecto a los menores que fueron puestos a disposición de ese tribunal o denunciados por particulares?
- "R. No produjo respuesta.
- "P. 6. En el ejercicio del 1o. de agosto al 18 de septiembre del año 2001 en curso:
- "P. 6.1. ¿Cuántas amonestaciones dictó?
- "R. 2 amonestaciones.
- "P. 6.2. ¿Cuántas multas decretó?
- "R. 1 multa.
- "P. 6.3. ¿Cuántos arrestos impuso?
- "R. 2 arrestos.
- "P. 6.4. ¿A cuántas personas condenó al trabajo comunitario?
- "R. 0.
- "P. 6.5. ¿A cuántas personas sentenció a reparar el daño?
- "R. 0.



"P. 7. ¿Existe personal de la Dirección de Defensoría de Oficio para auxiliar en su defensa a los presuntos infractores de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno?.

"R. Sí () No (X)

"P. 7.1. Si la respuesta es afirmativa, precisar nombres de los abogados, fechas y horarios de trabajo y antigüedad en el mismo.

"R. No hay.

"P. 8. ¿Cuenta con secretario ese tribunal?

"R. Sí () No (X)

"P. 8.1. Si la respuesta es afirmativa, precisar nombres, horario de trabajo y antigüedad.

"R. No hay.

"P. 9. En el ejercicio del 1o. de enero al 30 de septiembre del año 2001 en curso ¿cuántos recursos se promovieron en contra de la resolución de ese tribunal?.

"R. Ninguno.

"P. 10. De éstos, precisar ¿cuántos revocaron su resolución, cuántos la modificaron y cuántos la confirmaron?.

"R. Ninguno.

- - - 7o. Que con relación a lo anterior, se solicitó de dicho servidor público explicara el procedimiento que seguía cuando ponían a su disposición a un presunto infractor del Bando de Policía y Buen Gobierno, a lo que contestó de la siguiente manera:-----

"a) Que primero, mediante los partes informativos elaborados por los agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ponen a su disposición al presunto infractor;

"b) Que platica con el presunto infractor con relación a la falta o faltas que le son atribuidas;



"c) Que les informa del derecho que tienen de hacer una llamada estando detenidos;

"d) Asimismo, les informa del derecho de defensa que les asiste, ya sea para que lo hagan valer por sí mismos, por un abogado o por persona de su confianza; y

"e) Que para aplicar la sanción se basa en el motivo de la detención, así como de la declaración del presunto infractor.

--- 8o. Que después de entrevistar al juez del Tribunal de Barandilla, el visitador examinó al azar tres casos que fueron conocidos y resueltos por servidores públicos de dicho Tribunal, diligencia que se asentó en el acta respectiva, de la que se reproducen los pasajes pertinentes. Son los siguientes:-----

"Mocorito, Sinaloa, a 27 de octubre del 2001, 10:20 horas, entrevista con el licenciado **SP3**, Juez del Tribunal de Barandilla.
Examen de casos:

"1o. **C1**, años, domicilio conocido Boca de Arroyo, Mocorito, Sinaloa.

"a) Causa de detención: Ingerir bebidas embriagantes y por agredir a un agente de policía municipal.

"b) Sanción que le fue impuesta: Multa. No se precisa cuál fue la cantidad a la que se le condenó cubriera, ni tampoco se encontró el recibo respectivo.

"2o. **C2**, años, domicilio conocido Valle de Abajo La Mojada, Mocorito, Sinaloa.

"a) Causa de detención: Por agredir a una persona.

"b) Sanción que le fue impuesta: Arresto.

"3o. **C3**, años, domicilio conocido Las Palmas, Mocorito, Sinaloa.

"a) Causa de detención: Ingerir bebidas alcohólicas.

"b) Sanción que le fue impuesta: Arresto.

--- **OBSERVACIONES.** No hay constancia de que se hagan las notificaciones correspondientes a los interesados a fin de que ejerzan su derecho a la defensa, ya sea por sí mismos o por conducto de persona de su confianza; no se asienta



en ningún acta si se les hace saber o no de dicho derecho estando detenidos, así como el que tienen de interponer recurso de revisión en contra de la resolución dictada, en el supuesto, claro, de no estar de acuerdo con la misma (artículos 36 y 38, fracción V, última parte, de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado), lo cual permite presumir que ninguna notificación de ese tipo se hace, pues, en los casos examinados, si dichas notificaciones se hubieren hecho sin duda hubieran sido asentadas en algún documento o se vería reflejado con las actuaciones correspondientes, pero nada de ello se apreció en ese sentido. -----

--- Expuesto lo anterior y, -----

----- **CONSIDERANDO** -----

--- I. Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 bis; de la Constitución Política del Estado; 1o.; 2o.; 3o.; 5o.; 7o.; 16, fracción IX, y demás relativos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dado que las instalaciones que se inspeccionaron son de naturaleza municipal y las actuaciones que se examinaron corresponden a personal del Tribunal de Barandilla del municipio de Mocorito, este organismo es competente para conocer y resolver sobre la cuestión imbita en el caso que culmina con la presente resolución. -----

--- II. Que en la presente resolución debe dilucidarse si el proceder de los servidores públicos del Tribunal de Barandilla de Mocorito en los casos de los señores

C3, C1 Y C2

está ajustado a Derecho o no, es decir, si actúan con apego o no a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado y al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio.-

--- III. Que para ello, el primer paso es recordar algunas disposiciones que contienen principios que, o consagran derechos en favor del individuo, o bien, establecen límites y/o condiciones al obrar de las autoridades o servidores públicos, que como bien se sabe encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte relativa dicen así:-----

"Artículo 14.



.....
"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".
.....

"Artículo 17.
.....

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
.....

"Artículo 21.
.....

"...compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas."

--- Para tal fin, igualmente, es imperativo referirnos a la disposición relativa a esta materia de la Constitución Política del Estado, que es el artículo 125, que dice lo siguiente:-----

"Artículo 125.- Son facultades de los Ayuntamientos:

.....
"II. Expedir los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con las bases normativas establecidas en esta Constitución y en las leyes;"
.....

--- El ordenamiento a que se hace referencia en la última parte del precepto antes citado es, como se sabe, la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado, publicada en "El



Estado de Sinaloa”, órgano oficial del gobierno del Estado, de 2 de mayo de 1988, de la que es oportuno transcribir algunos de sus preceptos. Son los siguientes:- -

“Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto regular la expedición, contenido y procedimientos a que se sujetarán los Bandos de Policía y Buen Gobierno de los Municipios del Estado de Sinaloa.”

“Artículo 2o. Los bandos serán aprobados previa consulta popular y expedidos por los Ayuntamientos de los Municipios en cuya jurisdicción regirán, su contenido y aplicación estarán estrictamente apegados a lo dispuesto por este ordenamiento.”

“Artículo 6o. Sólo serán competentes para la aplicación de los Bandos, las autoridades expresamente señaladas en esta Ley.”

“Artículo 9o. En los Bandos de Policía y Buen Gobierno se deberán observar los siguientes principios:

“I. Respeto absoluto al ejercicio de los derechos individuales, sociales y políticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado y en las Leyes reglamentarias de ambos ordenamientos;”

“Artículo 10. Compete a los Tribunales de Barandilla el conocimiento de las faltas a los Bandos de Policía y Buen Gobierno, así como la aplicación de las sanciones correspondientes.”

- - - Dicha ley establece que tiene por objeto regular la expedición, contenido y procedimientos a que se sujetarán los Bandos de Policía y Buen Gobierno de los municipios del estado de Sinaloa, mismos que, previa consulta popular, serán expedidos por los ayuntamientos en cuya jurisdicción regirán, cuyo contenido y aplicación estarán estrictamente apegados a lo estatuido por dicho ordenamiento.-

- - - Asimismo, como no podría haber sido de otro modo, dispone que en los bandos municipales se deberá observar el respeto absoluto al ejercicio de los derechos individuales, sociales y políticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la del Estado y en las leyes reglamentarias de ambas constituciones. -----

- - - En lo que respecta al procedimiento que los Tribunales de Barandilla deben desahogar, lo establecen los siguientes preceptos: -----



"Artículo 32. El procedimiento ante el Tribunal se iniciará con la recepción del parte informativo de la policía sobre los hechos constitutivos de presunta infracción, con la presentación del detenido o con la denuncia de parte interesada.

"Artículo 35. Tan pronto como los detenidos o los requeridos por citatorio comparezcan ante la autoridad policiaca o ante el propio Tribunal, se le hará saber la conducta antisocial que se le imputa así como el derecho que tienen para defenderse por sí mismos o por conducto de otra persona.

"En todo caso, se les otorgará facilidades para comunicarse con su familia, con su abogado o con la persona que lo asista o lo auxilie.

"Artículo 36. El procedimiento ante los Tribunales de Barandilla será oral y público, levantando constancia por escrito de todo lo actuado. Sólo por acuerdo expreso del Tribunal la audiencia se desarrollará en privado.

"Artículo 37. El procedimiento en materia de faltas, infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se sustanciará en una sola audiencia. Estarán presentes los jueces, el secretario, el presunto infractor y su defensor, así como todas aquellas personas cuya declaración sea necesaria.

"Artículo 38. La audiencia se desarrollará en la siguiente forma:

"I. El Secretario presentará ante el tribunal al presunto infractor, informando sucintamente sobre los cargos que se le formulan;

"II. El presunto infractor alegará lo que a su derecho convenga por sí mismo o por medio de la persona que haya designado;

"III. El Tribunal recibirá las declaraciones de las personas involucradas en el caso;

"IV. El tribunal valorará las pruebas ofrecidas y dictará la resolución que corresponda; y,

"V. El tribunal les hará saber a los infractores las diferentes alternativas con que cuentan para el cumplimiento de la sanción impuesta, así como el derecho que tienen de interponer el recurso de revisión contra la resolución dictada."

- - - Los artículos 36 a 38 del ordenamiento citado, por su parte, regulan el procedimiento que los Tribunales de Barandilla deben desahogar antes, obviamente, de resolver la aplicación de alguna sanción, y no obstante su concentración --ya que se verifica en una sola audiencia-- de ser substanciado conforme lo disponen dichos numerales permitiría que el presunto infractor del Bando de Policía y Buen Gobierno ejerciera su derecho de audiencia, es decir, se



cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento que establece el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -----

- - - En atención a dichas disposiciones de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno el Ayuntamiento de Mocorito aprobó el Bando de Policía y Buen Gobierno para el propio municipio, mismo que fue publicado en "El Estado de Sinaloa", órgano oficial del gobierno del Estado, de 23 de agosto de 1996.-----

- - - Dicho Bando municipal contiene disposiciones de observancia obligatoria dentro del municipio, cuyo objeto es sancionar las conductas antisociales de los gobernados que no siendo constitutivas de delito alteren o pongan en peligro el orden público, atenten contra la seguridad y tranquilidad de las personas, estatuyendo, asimismo, los procedimientos y competencia de los tribunales de la materia para su aplicación, lo que, como es natural, debe guardar congruencia con las disposiciones constitucionales y legales que antes, para mayor claridad, se transcribieran.-----

- - - Para continuar con este estudio, enseguida se hará el examen de algunos preceptos del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio. Son los siguientes:-----

"Artículo. 135.- En sesión ordinaria convocada expresamente para este efecto, el Ayuntamiento designará los integrantes de los tribunales de barandilla.

"Los Jueces y los Secretarios durarán en su cargo tres años y podrán ser ratificados para un nuevo período; a partir de la segunda ratificación serán inmovibles de sus cargos y solo podrán ser destituidos por causa grave de irresponsabilidad oficial que será calificada por el Congreso del Estado.

"Artículo 138.- El Ayuntamiento supervisará las funciones de los Tribunales de Barandilla y dictará los lineamientos de carácter técnico y administrativo a que deban sujetar su actuación.

"Artículo. 139.- Los tribunales deberán llevar un registro pormenorizado, archivo y estadísticas de las actuaciones que realicen en los casos que sean sometidos a su conocimiento, observando los lineamientos que para tal efecto señala este Bando de Policía y Buen Gobierno.

"Los tribunales estarán obligados a rendir al Ayuntamiento un informe de labores y le entregarán la estadística de las faltas ocurridas en el Municipio, semestralmente.



- - - Los preceptos arriba reproducidos estatuyen, en la parte que interesa, que será responsabilidad del Ayuntamiento designar a los integrantes del Tribunal de Barandilla y que éstos deberán llevar un registro pormenorizado, archivos y estadísticas de las actuaciones que lleven a cabo en los casos que sean puestos a su conocimiento, observando los lineamientos que señala dicho bando municipal, así como que el Ayuntamiento supervisará el buen funcionamiento de los Tribunales de Barandilla, para lo cual dictará los lineamientos de carácter técnico y administrativo a que deban sujetar su actuación. -----

- - - Asimismo, el Bando municipal establece cuál es el procedimiento de investigación que los Tribunales de Barandilla deben seguir, lo que estatuye en los artículos que se transcriben a continuación: -----

"Artículo 140.- El procedimiento ante el Tribunal se iniciará con la recepción del parte informativo de los Agentes sobre los hechos constitutivos de presunta infracción, con la presentación del detenido sólo en flagrancia o con la denuncia de parte interesada.

"Artículo 141.- La detención sólo se justificará cuando el presunto infractor sea sorprendido en el momento de la ejecución de la falta. Quien realice la detención deberá presentar inmediatamente al supuesto infractor ante el Tribunal de Barandilla.

"Artículo 142.- Cuando no se justifique la detención o no se pueda ejecutarla, se hará la denuncia al Tribunal quien si la estima fundada, librará citatorio. En estos casos el Director de Seguridad Pública Municipal y Tránsito cumplimentará de inmediato el citatorio de referencia.

"Todo citatorio ante el Tribunal deberá de notificarse con veinticuatro horas de anticipación como mínimo a la hora fijada para tal efecto. En caso de desacato se impondrá arresto hasta por 36 horas.

"Artículo 143.- Tan pronto como los detenidos o los requeridos por citatorios comparezcan ante la Autoridad Policiaca o ante el propio Tribunal, se les hará saber la conducta antisocial que se le imputa, así como el derecho que tienen para defenderse por sí mismo o por conducto de otra persona.

"En todo caso, se les otorgará facilidades para comunicarse con su familia, con su Abogado o con la persona que lo asista o lo auxilie.

"Artículo 144.- El procedimiento ante el Tribunal de Barandilla será oral y público, levantando constancia por escrito de todo lo actuado; sólo por acuerdo expreso del Tribunal la audiencia se desarrollará en privado.



"Artículo 145.- El procedimiento en materia de faltas o infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se sustanciará en una sola audiencia. Estarán presentes el Juez, el Secretario, el presunto infractor, así como todas aquellas personas cuya declaración sea necesaria, en casos excepcionales se suspenderá la audiencia y continuará cuando el tiempo y las circunstancias lo permitan, sin que dicha suspensión exceda de 36 horas.

"Artículo 146.- La audiencia se desarrollará en la siguiente forma:

- "I. El Secretario presentará ante el Tribunal al presunto infractor informado suscintamente sobre los cargos que se le formulen.
- "II. El presunto infractor alegará lo que a derecho convenga por sí mismo o por medio de las personas que hayan designado.
- "III. El Tribunal recibirá las declaraciones de las personas involucradas en el caso.
- "IV. El Tribunal les hará saber a los infractores las diferentes alternativas con que cuenta para el cumplimiento de la sanción impuesta, así como el derecho que tienen de interponer el recurso de revisión."

- - - Las disposiciones transcritas, en la parte que interesa en la presente resolución, estatuyen que el procedimiento ante el Tribunal de Barandilla se sustanciará en una sola audiencia con la presentación del presunto infractor, dando cuenta con el parte informativo de la policía sobre los hechos constitutivos de la infracción que se le atribuye, y para que el presunto responsable de infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno pueda ejercer sus derechos de audiencia y defensa, estatuidos por los artículos 14; 16, primer y cuarto párrafos, y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho tribunal, como lo dispone el Bando, deberá hacer saber al inculpado la causa por la que se tramita procedimiento en su contra; que tiene derecho a nombrar a una persona de su confianza o abogado para que lo defienda; que el tribunal debe valorar el material probatorio que se presente tanto por la policía preventiva y/o por el ofendido de la conducta antisocial, como por el inculpado o su defensor, para que, con apego al principio de congruencia que debe de regir en toda decisión materialmente jurisdiccional, dicho tribunal dicte la resolución que corresponda, debiendo notificar al infractor las diferentes alternativas con que cuenta para el cumplimiento de la sanción impuesta, así como el derecho que tiene de interponer recurso de revisión en contra de dicha resolución, en el supuesto, claro, de no estar de acuerdo con la misma. -----



- - - Sin embargo, a pesar de lo dispuesto por tales disposiciones, de la entrevista practicada al licenciado **SP3**, esta Comisión advirtió que en todos los casos, al recibir a los detenidos por presuntas infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, el juez del Tribunal de Barandilla se limita a "chechar la falta", es decir, a platicar con ellos sobre qué fue lo que ocurrió, cómo, cuándo y dónde, pero, se insiste, no hay constancia alguna de que se les haga saber el derecho de que podían llamar a un familiar o persona de su confianza estando detenidos; de las diferentes alternativas con que cuentan para el cumplimiento de la sanción impuesta, así como el derecho que tienen de interponer el recurso de revisión en contra de la resolución que se dictara, en caso, desde luego, de no estar conformes con la misma, anomalía que, como se ha dicho, se corroboró al examinarse los expedientes relativos a los casos de los señores **C3, C1 Y C2**

en los que, por cierto, no se encontró que el Juez del Tribunal de Barandilla hubiese procurado o recabado dato o prueba alguna sobre si el detenido tenía o no algún empleo u ocupación, y en caso afirmativo, cual era éste y cuáles eran sus ingresos, así como la hora en que fue puesto a su disposición y la hora en que fue dejado en libertad.-----

- - - La finalidad de conocer si el detenido tenía o no algún empleo u ocupación, y en caso afirmativo, cuál era éste y cuáles sus ingresos, es con el objeto de contar con bases para determinar la sanción a aplicar, y de ese modo sostener, o defender en su caso, la legalidad de la misma, e incluso la legalidad de la propia actuación del juez del Tribunal de Barandilla por ajustarse, por ejemplo, al artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos segundo y tercero, que estatuyen que si los infractores son jornaleros u obreros no podrán ser sancionados con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día, y que tratándose de trabajadores o personas no asalariadas la multa no podrá exceder del equivalente de un día de su ingreso, precepto que podría haber sido transgredido al cobrárseles una multa excesiva con relación a sus condiciones económicas.-----

- - - Ambos tipos de situaciones evidencian que el tribunal no apega su proceder a lo que disponen los artículos 14; 16 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tampoco de lo que estatuyen los numerales 36 a 38, de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado, como tampoco se observan los artículos del 140 al 146 del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio, todo



ello en el procedimiento que se instaura en contra de los presuntos responsables de infracciones a reglamentos administrativos, transgrediendo así los derechos humanos al debido proceso legal y a la legalidad de los detenidos, como es el caso de los señores **C3, C1 Y C2**

que fueron examinados al azar y, desde luego, a título de muestra.-----

--- IV. Que con relación a lo anterior, resulta oportuno transcribir el siguiente precepto de la Ley Orgánica Municipal del Estado:-----

"Artículo 20. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de Gobernación, las siguientes:

"I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales."

--- El precepto transcrito estatuye que los integrantes del Ayuntamiento tienen, entre otros, el deber --como todos los servidores públicos-- de cumplir y hacer cumplir la Constitución --lo mismo la general de la República que la del Estado-- así como la legislación secundaria y los reglamentos gubernativos correspondientes, de ahí que, en relación con el Tribunal de Barandilla, el Ayuntamiento, como órgano colegiado de gobierno, es quien debe designar a los integrantes del mismo y supervisar sus funciones en atención a lo dispuesto tanto por el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mocorito, como de la Ley Orgánica Municipal.-----

--- Al respecto, también resulta oportuno examinar el siguiente precepto de la Ley Orgánica Municipal del Estado que estatuye, entre otras, las atribuciones de los presidentes municipales, que en el caso que nos ocupa son las que enseguida se transcriben:-----

"Artículo 31. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las siguientes:

.....
"III. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de los diversos ordenamientos municipales;
.....



"V. Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, salvo lo dispuesto en el artículo 65, fracción III, de la Constitución Política del Estado, en este último supuesto, tendrá la facultad de proponer la designación del titular de la seguridad pública municipal al Gobernador del Estado;

"VI. Imponer multas a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, pero si el infractor no pagare la multa ésta se permutará por el arresto correspondiente que en ningún caso excederá de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de un día de salario. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso;

"En caso de infracciones en materia de tránsito, se aplicarán las sanciones que establezcan las disposiciones legales conducentes;"

.....

- - - El numeral anterior estatuye, entre otras, tres atribuciones de los presidentes municipales, que son: la primera, y quizá la más importante, cumplir y hacer cumplir los diversos ordenamientos municipales que rigen en el territorio del municipio; la segunda, controlar la policía preventiva y de tránsito correspondiente, salvo la excepción prevista en el artículo 65, fracción III, de la Constitución Política del Estado, es decir, en el territorio donde habitual o territorialmente resida el gobernador del Estado, en cuyo caso tendrá la facultad de proponer su designación, y, finalmente, la tercera de tales atribuciones es la de calificar e imponer sanciones a los infractores de los bandos municipales de policía y buen gobierno, a través del órgano competente, haciendo las consideraciones correspondientes para quienes fuesen jornaleros, obreros, trabajadores o personas no asalariadas, así como para quienes infrinjan las disposiciones legales en materia de tránsito.-----

- - - Dicho artículo estatuye las atribuciones de los presidentes municipales, entre las que destaca, desde el punto de vista genérico, el deber de legalidad, formulado en el imperativo de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de los diversos ordenamientos municipales.-----

- - - Ciertamente, el precepto, de manera textual, se refiere a la obligación de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de los ordenamientos municipales, esto es, de los expedidos por el propio Ayuntamiento, pero eso no significa que su deber de legalidad se constriña a eso, y no tenga la obligación de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de ordenamientos de otra



naturaleza, estatales o federales, que le impongan alguna obligación, pues ello deviene ineludible de acuerdo con la protesta rendida de cumplir y hacer cumplir la Constitución, tanto la de la República como la del Estado, así como las leyes derivadas de una u otra, en los términos de lo dispuesto por los artículos 128, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 144, de la Constitución Política del Estado, y cumplir leal y patrióticamente con el encargo que les fuera conferido, compromiso que jurídica, política y éticamente obliga al acatamiento de lo que las mismas establecen, y ya hemos visto lo que los ordenamientos aplicables en la materia disponen.-----

- - - V. Que si a los razonamientos expuestos, que como es natural son esencialmente jurídicos, se quisiera agregar alguna consideración de orden filosófico para fortalecer la convicción por la obediencia que se debe al Derecho, fundamentalmente por parte de gobernantes, que deben ser los más interesados en hacer prevalecer el estado de Derecho, nos servirán las palabras de Friedrich Meinecke, que acertadamente dice así:-----

“En todo caso, el mismo Estado tiene un interés propio en obedecer al Derecho que el mismo promulga y en fomentar con su propio ejemplo la moral civil en el interior. La moral, el Derecho y la fuerza pueden por eso funcionar armónicamente en el interior del Estado.”

--- De conformidad con los resultandos expuestos y atentos a las consideraciones formuladas en los puntos precedentes, esta Comisión, de acuerdo con las atribuciones que le confieren los artículos 7o. y 16, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, concluye que en el caso de la investigación que hoy se resuelve es de dictarse, y por ello se dicta, la siguiente:--

----- **RESOLUCION** -----

--- Formúlese recomendación al Presidente Municipal de Mocorito.-----

- - - En virtud de lo antes resuelto, con fundamento en lo prevenido por los artículos 14; 16; 17, segundo párrafo; 21 y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 bis, de la Constitución Política del Estado; 1o., 2o., 3o., 7o., 16 y 28, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 20, fracción I, y 31, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado; 36 a 38 de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado; 140 al 146 del



Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mocorito, este organismo formula al Presidente Municipal de Mocorito, las siguientes:-----

----- **RECOMENDACIONES** -----

--- **PRIMERA.** Ordene al juez del Tribunal de Barandilla que en el desahogo de sus procedimientos indague el empleo u ocupación de los presuntos infractores al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio puestos a su disposición; que se les notifique del derecho que tienen de hacer una llamada estando detenidos; de las alternativas con que cuentan para el cumplimiento de la sanción que, en su caso, se les imponga, así como del derecho que tienen de interponer recurso de revisión en contra de tal resolución, en el supuesto, claro, de no estar conforme con la misma, y, finalmente, se elabore constancia de tales actuaciones. -----

--- **SEGUNDA.** En atención a lo establecido por los artículos 1o.; 3o., fracción IV; 47, fracciones I y XIX, y 48, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, instruya a la entidad municipal que corresponda inicie procedimiento de investigación orientado a determinar quién o quiénes fueron los responsables de las transgresiones a los derechos humanos citadas en esta resolución y, en su caso, se les sancione administrativamente.-----

*

--- La presente resolución reviste, como es claro, el carácter de *recomendación*, lo que autoriza a reflexionar, así sea someramente, sobre la auténtica naturaleza jurídica de éstas. -----

--- En el orden constitucional, tanto el artículo 102, apartado B, de la carta magna, como el 77 Bis, de la ley fundamental del Estado, señalan que las recomendaciones de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos tienen el carácter de ser *no vinculatorias*, pues ciertamente no se les puede equiparar a una sentencia, que eventualmente, en caso de no acatarse, podría ser impuesta por medio de la fuerza pública, pero de eso a que las recomendaciones de estos organismos puedan ser tomadas o dejadas, sin más, esto es, libremente, por las autoridades destinatarias, bajo el insulso argumento de que únicamente tienen "*fuerza moral*", media un mundo de diferencia.-----

--- Esa fuerza la tendrán, sin duda, en la medida del prestigio de la institución que las emita, pero no únicamente en ella radicará la fuerza de las recomendaciones; también tienen, indiscutiblemente, fuerza jurídica, que será tanta como tanta sea la honestidad, convicción y congruencia de las autoridades destinatarias con el respeto al estado de Derecho. -----

--- Y esa fuerza que desde el punto de vista jurídico tienen las recomendaciones del *ombudsman*, independientemente de que resulten inequívocas a una sentencia, deriva no sólo de que se trata de organismos creados constitucionalmente para investigar actos u omisiones de carácter administrativo presuntamente violatorios de los derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, es decir, para procurar que el poder se ejerza dentro de los límites de la racionalidad legal. -----

--- Si en ejercicio de esa atribución un organismo de tal naturaleza llega a la convicción de que un determinado servidor público transgredió diferentes disposiciones jurídicas y, por ende, incurrió en violación de derechos humanos, y justamente por ello se formula una recomendación al titular de la dependencia o institución a la que desde el punto de vista laboral se encuentre adscrito, tal autoridad no tiene, a juicio de esta CEDH, más alternativa que la de acatar la recomendación o demostrar que la misma carece de sustento, adolece de congruencia o por cualquiera otra razón resulte inatendible. -----

--- Lo anterior es así en función, en primer lugar, del carácter supremo de la Constitución, y por ende de los derechos humanos, habida cuenta que los fundamentales se encuentran consagrados en la misma, en su mayor parte dentro del capítulo denominado "*De las garantías individuales*", debiendo puntualizarse que el carácter supremo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos --ese es su nombre oficial-- deriva no sólo de su carácter fundamental, sino de que ella misma, de manera expresa, en su artículo 133, establece tal categoría. -----

--- En segundo lugar, porque todos los servidores públicos, antes de tomar posesión de su cargo, rinden protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución --tanto la general de la República como la del Estado-- así como las leyes derivadas de una y de otra, de modo que frente a una recomendación, si deciden no aceptarla, pero tampoco expresan las razones de su negativa, o expresándolas



no las acreditan, estarían, en principio, faltando a las obligaciones que implica la protesta, y eventualmente en solapamiento o encubrimiento. -----

--- En tercer lugar, porque todos los servidores públicos, estén investidos o no de autoridad, están obligados a responder por escrito las recomendaciones, y además, en los términos del artículo 16 de la ley suprema, así como de multitud de reiteradas tesis jurisprudenciales, están obligadas a motivar y fundamentar todos sus actos, de modo que si la autoridad destinataria de una recomendación decide no aceptarla, tiene, necesariamente, que motivar y fundamentar su resolución, lo que significa que tiene que demostrar, uno a uno, que los argumentos que sustentan la recomendación son falsos o inidóneos, carecen de congruencia o por cualquiera otra razón o circunstancia, la recomendación resulte inatendible. -----

--- En cuarto lugar, porque todos los servidores públicos, en los términos establecidos por los artículos 109, fracción III, y 113, de la constitución general de la República, están obligados a observar los principios de *legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia* en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, principios que reitera el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, y todo ello, aunque parezca poco, es mucho, particularmente para aquellas personas cuyo único poder radica en la legalidad, que es, como bien se ha dicho, el único poder de los sin poder: la observancia plena, cabal y puntual de la ley. -----

--- La autoridad destinataria de una recomendación, pues, podrá, sin dudas de ninguna especie, no aceptarla, pues los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos no son infalibles, pero tiene, *n e c e s a r i a, i n e x c u s a b l e m e n t e* que motivar y fundamentar su resolución, refutando uno a uno los elementos en que se apoya la recomendación, pero lo que no puede hacer, sin incurrir en responsabilidad, es no contestar, o contestar no aceptando la recomendación sin expresar razón alguna de su negativa. -----

--- El estado de Derecho es algo más, mucho más, que la simple existencia de ordenamientos jurídicos; el estado de Derecho supone y exige la observancia de la ley por todos y en todos los casos; no se puede admitir la violación de la ley, mucho menos de la Constitución, ni por razones de Estado, ni bajo el dudoso argumento de que es para hacer el bien, según el criterio de quien actúa u ordena,



pues después se violaría con cualquier pretexto; se ha dicho y se repite con relativa frecuencia, que nadie está al margen o por encima de la ley; si eso es así, las recomendaciones del *ombudsman*, con todo y ser *no vinculatorias*, tienen esa fuerza jurídica que deriva del estado de Derecho, que impide que una autoridad pueda obrar en forma caprichosa. -----

- - - Esa es, pues, a juicio de este organismo, la verdadera naturaleza de las recomendaciones del *ombudsman*, y esta Comisión confía en que tales argumentos, que no son sino una breve traducción de diferentes principios constitucionales, sean cabalmente entendidos y tengan, en la especie, una aplicación puntual. -----

*

- - - Por otra parte, en los términos de lo estatuido por el artículo 62, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, se dictan los siguientes: -----

----- **ACUERDOS** -----

- - - **PRIMERO.** Notifíquese al C. Presidente Municipal de Mocorito, en su calidad de autoridad destinataria de la presente recomendación, misma que en los archivos de esta Comisión ha quedado registrada bajo el número 038/01, debiendo remitírsele, con el oficio de notificación correspondiente, una versión de la misma, con firma autógrafa del suscrito, para su conocimiento y efectos procedentes.-----

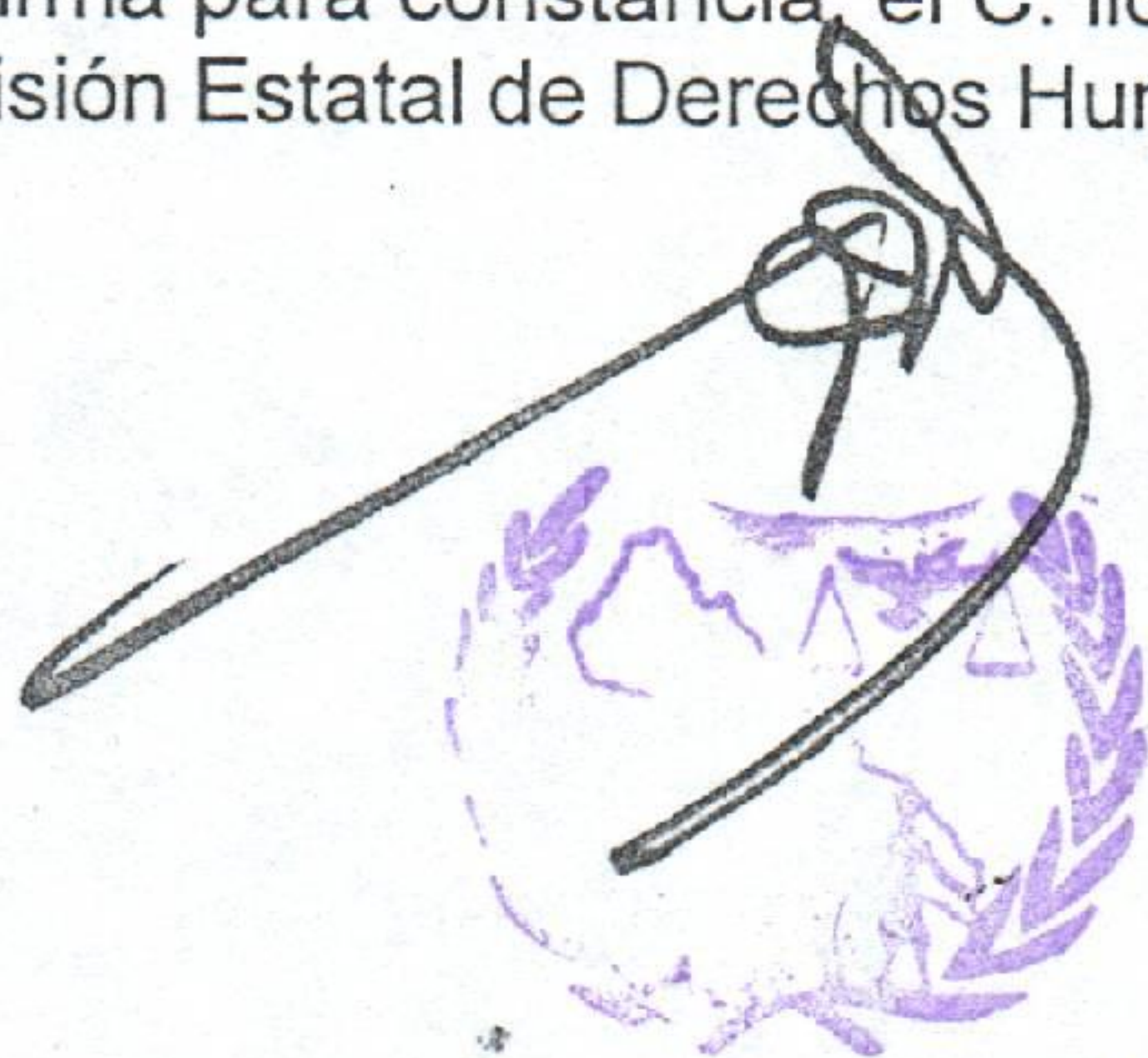
- - - **SEGUNDO.** En el oficio de notificación que al efecto se formule para el C. Presidente Municipal de Mocorito, como autoridad destinataria de esta Recomendación, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 58, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señálesele plazo para la contestación de la presente Recomendación, así como otro adicional para la entrega de las pruebas relativas al cumplimiento de la misma, en el supuesto de que sea aceptada.-----

- - - **TERCERO.** En la notificación correspondiente, puntualícese a la autoridad destinataria que en caso de que acuerde no aceptar la presente Recomendación, la decisión respectiva deberá motivarla y fundamentarla debidamente, expresando,



una a una sus contraargumentaciones, de modo tal que demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o por cualquiera razón resulten inatendibles, todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes, específicamente, en el caso de los servidores públicos, así como de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la general de la República que la del Estado, así como de las leyes que de una y otra hubieren emanado. -----

--- Así lo resolvió, y firma para constancia, el C. licenciado JAIME CINCO SOTO, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.---



COMISIÓN ESTATAL
de DERECHOS HUMANOS
SINALOA

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELIMINARON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE DE SERVIDORES PÚBLICOS, NOMBRES DE CIUDADANOS, EDADES, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XXVI, 149, 155 FRACCIÓN III, 156 Y 165 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES TRIGÉSIMO OCTAVO FRACCIÓN I, QUINCUGÉSIMO SEGUNDO PÁRRAFO SEGUNDO, QUINCUGÉSIMO TERCERO, QUINCUGÉSIMO NOVENO, SEXAGÉSIMO SEGUNDO Y SEXAGÉSIMO TERCERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS. PERÍODO DE RESERVA PERMANENTE.